

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Folio: UT-139/2024

ASUNTO: Respuesta a solicitud 100177400006324

**C. JUAN MORALES
P R E S E N T E**

En relación a la solicitud de información recibida en esta Unidad de Transparencia, a la cual se le asignó el número de folio 100177400006324, donde textualmente dice:

"Se solicitan las quejas y todas las acusaciones de los periodos 2022 al 2023 contra la siguiente persona:

> Edgar Saúl Rodríguez Contreras

Se solicita el nombramiento de la siguiente persona:

> Edgar Saúl Rodríguez Contreras

Se solicitan los planes de trabajo 2022 al 2024 del área a la que corresponde la siguiente persona:

> Edgar Saúl Rodríguez Contreras

Se solicitan las actas del comité de ética, dónde se tenga como responsable de alguna falta a la siguiente persona

> Edgar Saúl Rodríguez Contreras." (SIC)

Encontrándome dentro del término que para tal efecto me fuera concedido y con la finalidad de privilegiar en todo momento el derecho humano de los ciudadanos de tener acceso a la información pública, me permito informar lo siguiente:

Se solicitan las quejas y todas las acusaciones de los periodos 2022 al 2023 contra la siguiente persona: > Edgar Saúl Rodríguez Contreras

En primer término el artículo 6 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes, asimismo, el artículo 16 de la Carta Magna, dispone que todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros; por lo que esta Autoridad considera que lo descrito anteriormente es una garantía de cualquier persona, independientemente del carácter de su ocupación, es decir, si se encuentra o no activo en el Servicio Público.

En ese sentido, se considera que proporcionar información de la existencia de quejas o acusaciones de una persona identificable, y que además no tenga una resolución sancionatoria, puede afectar al citado en su honor, buen nombre, imagen e incluso en su presunción de inocencia.

Y que en atención al siguiente criterio:

*"Registro digital: 2021902
Instancia: Plenos de Circuito*



Calle Pino Suárez
No. 1000 Pte. Zona Centro
C.P. 34000 Durango, Dgo.
Tel. 618 137 72 00 / 618 137 72 01

Décima Época

Materia(s): Administrativa

Tesis: PC.I.A. J/159 A (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5530

Tipo: Jurisprudencia

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. AL CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA CONSIDERARLO PARTE DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DE TIPICIDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, POR LO QUE LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO AL ERARIO RECAE EN LA AUTORIDAD FISCALIZADORA.

En la jurisprudencia P./J. 99/2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que tratándose de las normas relativas al procedimiento administrativo sancionador resulta válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, siempre y cuando resulten compatibles con su naturaleza. En esa medida, el procedimiento administrativo resarcitorio previsto en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, vigente hasta el 18 de julio de 2016, cumple con los requisitos para considerarlo parte del derecho administrativo sancionador, pues su finalidad es sancionar las irregularidades o faltas causadas por actuaciones de servidores públicos, e incluso particulares, que vulneren el uso honesto y transparente del erario público, con el objeto de obtener la indemnización por los daños y perjuicios causados, mediante el pago que se determine en el pliego definitivo de responsabilidades. Además, tiene un fin represivo o retributivo que se ejerce como una manifestación de la potestad punitiva del Estado, ya que la indemnización que se condene a pagar al probable responsable deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios, o ambos, causados por la conducta considerada administrativamente ilícita, más su actualización en términos del Código Fiscal de la Federación. Finalmente, atendiendo al principio de presunción de inocencia, la carga de la prueba sobre el daño o perjuicio causado al erario público recae en la autoridad fiscalizadora, teniendo la obligación de presentar las pruebas que acrediten la existencia de la responsabilidad del probable responsable, lo que implica que este último no está obligado a probar su inocencia, derivado de que tiene reconocida tal calidad a priori.

PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO."

Resulta pertinente traer a cuenta lo establecido por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cita:

*"Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
[...]"*

B. De los derechos de toda persona imputada:

I.- A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; [...]"

Entonces, hablando de la presunción de inocencia y aplicando las normas relativas, así como los Tratados Internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia,

esta Autoridad que funge como Sujeto Obligado, cree pertinente traer a cuenta la siguiente jurisprudencia:

*"Registro digital: 2006092.
Instancia: Primera Sala.
Décima Época.
Materia(s): Constitucional, Penal.
Tesis: 1ª./J. 24/2014 (10ª).
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 497.
Tipo: Jurisprudencia.*

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL.

La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena."

Por su parte, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se prevé:

"Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales injerencias o ataques"

Asimismo, en el artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, establece lo siguiente:

"Artículo 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."*

En ese sentido, de manera coincidente en el artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece lo que se transcribe a continuación:

"Artículo 17.-

- 1.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
- 2.- Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o ataques."

De todo lo anteriormente escrito, se tiene que el Derecho Mexicano y los Tratados Internacionales de los que México es parte establecen, que a menos que se declare la culpabilidad, o bien, responsabilidad administrativa por virtud de una resolución o sentencia sancionatoria correspondiente, proporcionar información, como la que se solicita en la presente, que es quejas o acusaciones de una persona identificable, resulta inadecuado ya que, al referirnos de manera directa o identificada a una persona física, la divulgación de información representaría un riesgo significativo del cuidado especial en la honra y reputación del servidor público, y puesto que, conforme a lo expuesto en líneas precedentes, el derecho a su intimidad, constituye un derecho fundamental en cuanto al no ser conocidos en ciertos aspectos de su vida y el poder de decisión sobre la publicidad de datos relativos a su persona y desarrollo de la misma, y lo que es más, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás, en términos de la siguiente tesis:

"Registro digital: 165821.

Instancia: Pleno.

Novena Época.

Materia(s): Civil, Constitucional.

Tesis: P. LXVII/2009.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 7.

Tipo: Aislada.

DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.

Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual; entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del

conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.”

A fin de abundar, resulta adecuado traer a cuenta la definición de honor establecida por el Diccionario de la Real Academia Española, donde se puntualiza como 1. Cualidad moral, 2. Gloria o buena reputación y 3. Dignidad¹, y que es el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de la expresión de su propia imagen. Por consiguiente, el derecho a su intimidad, es un derecho humano que involucra el tratamiento de forma decorosa de cada individuo.

En ese sentido, en atención a la Resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dentro del expediente RRA 7446/17, se estima que cualquier pronunciamiento que dé cuenta de la existencia o no, de procedimientos en contra de una persona identificable, más si no existe resolución o sentencia que imponga una sanción en su contra, puede afectar su honor, buen nombre, imagen e incluso presunción de inocencia, toda vez que, afecta la esfera privada que podría generar una percepción negativa sobre Gerardo Antonio Gallegos Isais o Teodulo Pérez Martínez.

De las normas constitucionales, como lo son el artículo 6 apartado A fracción II y 16, que establecen:

“Artículo 6o...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

...
A. *Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

...
II. *La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes...”*

“Artículo 16. *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.*

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros...”

¹ Definición **“Honor”** Diccionario de la Lengua Española - Real Academia Española
<https://www.rae.es/drae2001/honor>

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.

Es entonces que, resulta sumamente importante para esta Dirección el privilegiar la protección de datos que obran en los archivos correspondientes, toda vez, como se mencionó líneas arriba, no se encuentra sujeto a un procedimiento ni existe en ese momento una sanción, por lo que, se considera que, de proporcionar información sobre si existe o no una queja o señalamiento por hechos presuntamente irregulares, se vulneran los derechos de quien se encuentre sujeto a investigación.

Ahora bien, es relevante mencionar que en el caso de que quien solicita la información referente a cualquier registro que obre en la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, tendría que ser parte del expediente formalizado como sujeto a investigación para poder tener acceso directo a ella, toda vez que, el denunciante no forma parte de un proceso de investigación, sirviendo de base la siguiente:

"Registro digital: 2023879.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Undécima Época.

Materia(s): Administrativa.

Tesis: I.12º.A.I. A (11ª).

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV, página 3410.

Tipo: Aislada.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL DENUNCIANTE EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN RELATIVA, NO INCLUYE EL ACCESO AL EXPEDIENTE COMO COADYUVANTE DE LA AUTORIDAD.

Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la negativa de darle acceso a los expedientes físicos, cuyo origen son las denuncias que interpuso en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El Juez de Distrito estimó que el denunciante no es parte en la etapa de investigación, por lo que no se le otorga la posibilidad de tener acceso a los expedientes; inconforme, promovió recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la participación activa del denunciante en la fase de investigación de responsabilidades administrativas es sólo con el fin de exponer actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas en relación con los hechos de autoridades denunciadas y para impugnar en la vía correspondiente el acuerdo de conclusión o abstención de la autoridad investigadora de iniciar el procedimiento relativo, pero en modo alguno incluye el acceso al expediente como coadyuvante de la autoridad.

Justificación: Lo anterior es así, ya que la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé una etapa de investigación y otra de substanciación, donde propiamente inicia el procedimiento de responsabilidades administrativas, y es en esta última donde de conformidad con el artículo 116, fracción IV, de la mencionada ley, el denunciante adquiere la calidad de tercero. En ese contexto, la participación activa que se le otorga en la fase de investigación sólo es en su carácter de denunciante de

hechos; máxime que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino de la colectividad."

Se solicita el nombramiento de la siguiente persona: >Edgar Saúl Rodríguez Contreras

Se informa que el C. Edgar Saúl Rodríguez Contreras, no forma parte del personal adscrito a esta Secretaría de Contraloría.

Se solicitan los planes de trabajo 2022 al 2024 del área a la que corresponde la siguiente persona: >Edgar Saúl Rodríguez Contreras


Se informa que el C. Edgar Saúl Rodríguez Contreras, no forma parte del personal adscrito a esta Secretaría de Contraloría.

Se solicitan las actas del comité de ética, dónde se tenga como responsable de alguna falta a la siguiente persona >Edgar Saúl Rodríguez Contreras." (SIC)

Se informa que el C. Edgar Saúl Rodríguez Contreras, no forma parte del personal adscrito a esta Secretaría de Contraloría.

En virtud de lo anterior, se da respuesta en tiempo y forma a lo solicitado, esperando haber atendido de manera satisfactoria su solicitud de información, le comunico que en caso de no estar conforme con la respuesta otorgada, podrá interponer un Recurso de Revisión de manera directa ante el Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, sitio en calle Negrete 807 Oriente, antes de Libertad, Zona Centro, teléfonos: (618) 811 77 12, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente escrito; en la Plataforma Nacional o bien, al correo electrónico www.idaip.org.mx o ante la Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Contraloría, sito en Pino Suárez No. 1000 pte., teléfonos: (618) 137 7218, en términos de los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango.

ATENTAMENTE
VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 20 DE JUNIO DE 2024



L.C. y T.C. MARÍA OLIVIA TRUJILLO BAYONA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

c.c.p. Martha Hurtado Hernández.- Coordinadora General de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Durango